

Reflexiones sobre la Política Agropecuaria 2010-2021

Marco Chaves Solera⁶

Cada cuatro años los costarricenses percibimos que el país muere y nace de nuevo con cada cambio de gobierno. Al saliente se le acaban las ideas, las fuerzas y la credibilidad; el que ingresa hace renacer la esperanza revestida en propuestas con recetas mágicas para resolver la grave problemática nacional. Termina un ciclo y empieza otro con esperanzas y promesas de enmienda.

Presentó, días atrás el gobierno de la señora Chinchilla Miranda lo que denominó "Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021", la cual demarca la ruta que deberían seguir los gobiernos en los próximos 11 años en materia agropecuaria, agroalimentaria y de desarrollo rural, con los "golpes coyunturales de timón" razonables y necesarios. ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer en este caso? Es la pregunta que muchos nos hacemos en torno a la propuesta planteada. ¡Es más retórica! ¿Una propuesta academicista!, aseveran muchos basados en la incredulidad nacida en experiencias pasadas ¿Y los recursos necesarios para operar el Plan dónde están, de donde saldrán?, señalan y coinciden la mayoría de dirigentes del sector.

Como toda propuesta, lo serio, responsable, razonable, justo y profesional es procurar analizar su planteamiento y contextualizarlo a nuestra realidad actual y futura, tanto nacional como internacional, para emitir una opinión más objetiva y fundamentada.

¿De qué partimos en el plano de lo sustantivo como realidad inmediata en el SA? Una agricultura determinada por las decisiones del Ministerio de Comercio Exterior y sectores económicos, en franca desaparición, quebrada en dos sectores bien definidos: exportación (amarrado) y consumo interno (olvidado); alta especialización institucional desaprovechada; infraestructura productiva ausente y deficiente; tramitología y leyes al máximo; carencia de incentivos reales y tangibles; una banca virtual inalcanzable para el productor; conflictos ambientales por doquier; clima descontrolado y agresivo; altos costos de producción; intermediación galopante y explotadora; tecnología deficiente; capacidad limitada de almacenamiento; asistencia técnica especializada insuficiente; desincentivo y desprotección de nuestros productos básicos; entorno altamente



competitivo; carencia de zonificación y ordenamiento territorial; asedio urbano; institucionalidad pública desacreditada, sistemática y calculadamente debilitada; líderes y dirigentes de saco y corbata que poca vinculación directa (digo campo) tienen con los problemas reales del agricultor; politiquería a la orden del día, etc.

A esto se suma una política macroeconómica que mantiene baja inflación, excesos de liquidez (nadamos en un mar de dinero), pero paradójicamente con altos índices de pobreza, trabajo limitado y despidos a la orden del día. Sistema cambiario que afecta exportaciones. No todo es tampoco negativo, pues hay sectores y actividades exitosas, muy organizadas con representación idónea, capacidad gerencial y tecnología competitiva que los mantiene vigentes; sin embargo, hay que reconocer que son los menos y van en extinción.

Esta realidad hace que resulte difícil esperar cambios de fondo y significativos en el transcurrir del sector en el corto plazo, pues muchos de los problemas son estructurales, históricos y complejos, aunque la sana intención de enfrentarlos mediante una política como se propone, debe reconocerse, apoyarse y compartirse como labor de todos y no apenas de un gobierno o una cartera. El enorme problema es que las necesidades del sector y del productor son de hoy por lo que las respuestas a sus necesidades no esperan para dentro de 3, 5 o 10 años. ¿Qué nos ofrece entonces la propuesta gubernamental para atender problemas de hoy y mañana que todos conocemos? Cabe preguntarse ¿Son las soluciones requeridas de índole técnico o político? La propuesta devuelve la importancia que el sector tiene, por lo que es un intento válido, necesario y oportuno.

Aquí se sabe muy bien lo que hay que hacer pues como principio y mandato general, el Estado debe organizar y estimular la producción, construir una economía que establezca un equilibrio entre libertad económica, equidad y solidaridad, generar

más empleo mejor remunerado, atraer inversión productiva, reducir inflación, menos burocracia improductiva y costosa, mejorar la competitividad, promover exportaciones sin desatender a los campesinos y la producción nacional, repartir la riqueza de manera adecuada y procurar el mayor bienestar a los habitantes con fundamento en los principios de justicia cristiana y solidaridad social. Debe romperse la triste paradoja neoliberal actual: cuanto más riqueza se produce más pobreza se genera ¡que demuestren los defensores de esas ideas lo contrario! El revelador Informe Evaluativo del Sector Agropecuario hecho público por la Contraloría General de la República en agosto anterior, puso en evidencia la profunda problemática sectorial existente y las presuntas razones por las que este ha venido a menos en las últimas décadas, favorecido por las debilidades y limitaciones existentes en la rectoría del MAG y la inexistencia de un Plan de Desarrollo Agropecuario. Solicita el ente contralor al MAG un inmediato replanteamiento de funciones del SA y sus instituciones.

Sustentan la política gubernamental agropecuaria propuesta tres pilares claramente definidos y alineados institucionalmente que estiman darán cumplimiento a los objetivos pretendidos: 1) Competitividad, 2) Innovación y Desarrollo Tecnológico y 3) Gestión de Territorios Rurales. Cada pilar establece sus áreas estratégicas y los instrumentos de política.

La competitividad es un asunto importante, complejo y profundo. Es claro que el futuro nacional y por ende el del agro, dependen en gran medida de su capacidad competitiva con respecto a las otras naciones del mundo. Sin embargo, mientras la agricultura nacional esté polarizada sin discrecionalidad política por dos sectores distintos separados por la concentración de los ingresos y el acceso a los recursos, uno gozará de los beneficios del progreso y de los adelantos tecnológicos; el otro será receptor de necesidades insatisfechas e incompletas. El destino del SA será irremediamente hacia escenarios de descontento, desazón, protesta y crisis recurrente. Crecimiento con equidad y justicia social es la fórmula, para lo cual es necesario producir y exportar más para disponer más recursos y poder distribuir más.

⁶ Ingeniero Agrónomo. Expresidente Colegio de Ingenieros Agrónomos, correo: mchavez@laica.co.cr

Puntualiza la propuesta en este y los otros dos pilares numerosas acciones por realizar, todas bien concebidas e intencionadas, pero queda la enorme duda ¿Puede pedirse a los productores hacer lo que el Estado está lejos, muy lejos de aportar como contraparte ejemplarizante? ¿Cómo se hará efectivo ahora lo que por historia ha sido deficiente, cuál es la fórmula ganadora? ¿Están preparadas las entidades gubernamentales para impulsar y disparar con la capacidad, consistencia y continuidad requerida el cambio necesario en cuanto a "prestación de servicios eficientes y eficaces, de apoyo institucional? ¿Cuenta el funcionario público con la motivación, capacitación, estímulo y recursos para ello? ¿Se puede ser competitivo con los caminos de acceso y carreteras nacionales? En este sentido tópicos específicos de la propuesta como: mejora regulatoria y simplificación de trámites; trámites digitales y virtuales; administración eficiente de Tratados (8 aprobados, 3 en negociación); creación de Bancos de Germoplasma; desarrollo de CENADITAS; modernización del CENADA y las ferias del agricultor; sistema de banca para el desarrollo; seguro de cosechas; censo agroalimentario; tema climático y meteorológico tímidamente abordado, entre otros, dejan duda y la verdad una gran interrogante de lograr cambios pronto y profundos. No se aborda el tema del costo de los insumos e incentivos reales a la producción, algo fundamental y necesario atender y resolver; tampoco lo relativo a la reforma, alineamiento o reorientación institucional, pues lo que acontezca con el IDA, INTA y CNP es trascendental.

El tema Innovación y Desarrollo Tecnológico muy ligado al anterior es también vital y tal vez el más manipulado por los diferentes gobiernos y gobernantes, sin lograr impactos productivos. Aquí el tema no es solo de recursos insuficientes sino principalmente de integración, articulación, priorización acertada y metas institucionales comunes. No posee el SA ni siquiera un Sistema Nacional Agropecuario (SNITTA) operando ¿Cómo puede unirse ahora a los sectores público, privado y académico cuando las diferencias y objetivos son tan dispersos y los recursos tan escasos? ¿Apenas por simple motivación, interés o directriz gubernamental? ¿No será mejor respetar las independencias y coincidir en las metas? La asignación presupuestaria tanto del MAG, INTA como del MICIT demuestra que la Ciencia y la Tecnología no gozarán de privilegio alguno en esta Administración ¿Cómo entonces inducir el cambio propuesto y pretendido?

El pilar Gestión de Territorios Rurales es un acierto en procura de crear y abrir espacios necesarios de participación integrada y articulada, lo que es realmente prioritario por cuanto los agricultores están en el campo y las zonas rurales y no en las ciudades. Este pilar, de ejecutarse como se pretende, permitiría atender necesidades reales de los agricultores. La intención es buena, la necesidad inmensa, el programa bien ubicado pero muy pretencioso y los mecanismos para incentivar, fomentar, desarrollar y fortalecer requieren necesariamente de recursos reales no sólo de buenas intenciones.

No se refiere el programa de manera clara, directa y sincera al tema seguridad alimentaria y consecuentemente a las posibilidades de sobrevivencia y permanencia del pequeño agricultor no exportador ¿Por qué no lo hace siendo un tema tan actual y trascendental? Hay en todo esto muchas cosas que decir, especulativas tal vez, pero que por manifestaciones recientes de los jerarcas, particularmente de la ministra del COMEX (Diario Extra, 20 setiembre), permiten conocer pensamiento y por ende posible línea de actuación futura en la materia. No comparto la opinión de que es mejor importar que producir o mejor tener el recurso para comprar como lamentable y tristemente se ha externado ¿Será que habrá siempre producto de calidad disponible para comprar a precios accesibles? La realidad revela lo contrario, pues actualmente hay carencia de frijol en Centroamérica; además, la FAO anuncia incremento y volatilidad en el precio mundial de los cereales. El país debe ineludiblemente asegurar un abastecimiento mínimo.

Las decisiones en el SA no deben guiarse por purismos teóricos ni desvíos ideológicos nacidos y decididos en COMEX y atendidos fielmente por los designados sectoriales, pues esos son anacronismos. La realidad no puede reducirse apenas a lo económico pues la agricultura es más que eso, como también la democracia va más allá de simples elecciones libres. La agricultura debe respetarse y valorarse en su propia dimensión como forma de vida y no reducirse a una simple ecuación matemática o relación beneficio-costos como tantos dogmáticos académicos hacen ahora. El discurso del programa propuesto se cae



con expresiones, tesis y pensamientos de esa naturaleza que generan incertidumbre, incredulidad y atentan contra la estabilidad y existencia de un sector campesino importante para el. Los costarricenses necesitamos seguridad personal, económica, alimentaria, en salud, ambiental y estabilidad política. El Estado tiene y juega un papel intransferible y obligado en cumplir la misión de proporcionarlo; es por eso necesario buscar un Estado más pequeño pero fuerte y solidario. Debe volverse a buscar revivir el otrora Contrato Social que tanto beneficio le generó a la sociedad costarricense.

Las jerarcas del MAG deben concentrarse en negociar y cumplir con certeza y serenidad los objetivos estratégicos pretendidos y trabajar en seleccionar y afinar la calidad de las herramientas para alcanzarlos; si no se tienen los caminos deben inventarlos. Desarrollar el agro no necesita de proyectos monumentales, obras majestuosas, decisiones dramáticas o acciones sobrehumanas; por el contrario, se debe avanzar rápido con acciones sustanciales y prioritarias que generen impacto y confianza, dejando trabajar a la gente honesta, protegiendo y apoyando al pequeño y mediano agricultor, pero sobre todo, permitiendo y favoreciendo que la administración pública no obstaculice el funcionamiento del sector privado, fuente de trabajo, divisas y crecimiento.

El reto convertido en desafío no es fácil y la pretenciosa propuesta política planteada en términos de mediano y largo plazo es un buen intento para procurar avanzar. Por ahora sólo son buenos deseos y un buen diagnóstico, el tiempo dirá su aplicabilidad, concreción y eficacia. Pesa aún superar el límite de los 15 meses ¡veremos qué pasa, el tiempo lo dirá, ojalá lo mejor!